



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 005 2021 00189 01  
Sentencia: S-008

### **AUTO**

Se reconoce personería judicial para actuar en representación de la AFP PORVENIR S.A. a la Dra. KAREN SOFÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ identificada con la TP 383.959, conforme a la Escritura Pública N° 1326 del 5 de mayo de 2022 y al Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene en costas a las entidades demandadas.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 17 de septiembre de 1963 y que empezó a realizar cotizaciones al Seguro Social a partir del mes de julio de 1983, cotizando 314 semanas en ese régimen; que el 28 de diciembre de 1995 se trasladó a PORVENIR S.A. cotizando 986 semanas en el RAIS. Que el 19 de junio de 2020 solicitó a la AFP PORVENIR S.A. información sobre el traslado del saldo a Colpensiones incluidos los rendimientos y otros conceptos; el 31 de agosto de 2020 envió derecho de petición a la Superintendencia Bancaria requiriendo información sobre la validez de su traslado de régimen pensional. Al darle respuesta a las peticiones le indicaron que no se encontraba multiafiliado, razón por la cual pidió el traslado de régimen, el que le fue negado con base en lo establecido en el artículo 2 de la ley 797 de 2003.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, PORVENIR S.A. niega la totalidad de hechos de la demanda indicando que la afiliación se realizó de forma libre y voluntaria, en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época, efectuándose la debida asesoría y entregándose una información clara, suficiente y veraz; además de ello, dicha AFP se acercó al afiliado para realizar la asesoría previa al periodo de prohibición, decidiendo omitir el demandante la información. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que no se demostró causal que invalide la afiliación, la cual se realizó producto de una decisión voluntaria del demandante. Como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por la ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante y la de afiliación en el mes de julio de 1983 al ISS. No le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso, y apreciaciones normativas de la parte demandante. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inexistencia de la obligación respecto al traslado, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración-seguros previsionales-comisiones indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación y la genérica.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 5 de julio de 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

“PRIMERO: DECLARAR ineficaz el traslado del señor JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO, quien se identifica con la cédula 70.559.753, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-, por falta de consentimiento informado, lo que conllevó a un error en el consentimiento de la demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la A.F.P. PORVENIR, es decir, porque su decisión no fue libre y voluntaria, tal como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la afiliación al Régimen de Prima Media – RPMPD del señor JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO, ... no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Pensiones, según lo establecido anteriormente.

TERCERO: CONDENAR a la A.F.P. PORVENIR S.A., a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- el cien por ciento (100%) de los aportes efectuados por la demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos los frutos y rendimientos financieros que sobre los mismos se ubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación del demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de régimen pensional, valores que deberán ser debidamente indexados, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- a recibir los aportes que la A.F.P. PORVENIR S.A. le devuelva como resultado de la ineficacia decretada, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por la señora JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO, ... como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral.

QUINTO: DECLARAR la improsperidad de las excepciones propuestos por la AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

*SEXTO: CONDENAR en costas a la A.F.P. PORVENIR S.A., Inclúyase como agencias en derecho a favor del señor JORGE ENRIQUE ROZO TIRADO, ... por la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000), que equivalen a 2 SMLMV. Se absuelve a COLPENSIONES del pago de costas procesales."*

## **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación insistiendo en que esa AFP cumplió con el deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, ya que, los requisitos de información que aduce el despacho debían darse al momento de la afiliación, corresponden a las disposiciones del Decreto 2241 del 2010 que para el momento en que el afiliado realizó su traslado no se encontraba en vigencia, por lo que debió aplicarse la normatividad vigente para la fecha del traslado toda vez que es desfavorable para las administradoras de fondos de pensiones que se haga la aplicación en un espectro de tiempo diferente de la norma vigente. Argumenta que PORVENIR S.A. entregó toda la prueba documental que sostenía que la afiliación del demandante efectivamente se realizó bajo los términos establecidos en la ley, además el actor confiesa haber recibido visita de los asesores de PORVENIR S.A. en la que se le entregó información acerca del régimen de ahorro individual y de la administradora de fondos de pensiones, para posteriormente confirmar su deseo de permanecer en dicho régimen pensional, firmando el formulario de afiliación. Agrega que el Juez de Primera Instancia le restó importancia al deber de re asesoría pensional por parte de PORVENIR S.A., pues se citó al demandante y dice no comparecer a la administradora, lo que da cuenta que efectivamente en todo el tiempo en el que ha estado afiliado a PORVENIR S.A. ha tenido la disposición para la prestación de toda la información, sumado a ello, tuvo la oportunidad administrativa de trasladarse a Colpensiones y decidió no hacerlo.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de Colpensiones presentó alegatos de conclusión ratificándose en los argumentos expuestos en la contestación a la demanda e insistiendo en la solicitud de ordenar al fondo privado la devolución de todos los conceptos recibidos con ocasión de la afiliación, junto con la respectiva indexación.

Por su parte la apoderada de PORVENIR S.A. solicitó se revoque la sentencia al considerar que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado de Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, por cuanto la decisión de la parte actora se realizó de manera espontánea, sin presiones o apremios y cumpliendo los requisitos de la ley; refiere que el demandante contó con la oportunidad de trasladarse al RPMPD, sin embargo, permaneció en el RAIS. Solicita finalmente que, en caso de considerar que el negocio jurídico celebrado entre las partes no tuvo validez, se tenga en cuenta la imposibilidad de reintegrar a Colpensiones las comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales y lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima –FGPM-, incluida la indexación de esos conceptos. En relación con la condena en costas, indica que esa entidad siempre obró con buena fe objetiva, por lo que dicha condena no es procedente.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA

en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* el señor JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ VALENCIA nació el 17 de diciembre de 1963; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS– y comenzó a realizar cotizaciones allí, el 26 de julio de 1983; y *iii)* el 28 de diciembre de 1995 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PORVENIR S.A., efectivo a partir del mes de enero de 1996, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>1</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una

---

<sup>1</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”



afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, se destaca su manifestación en torno a que el fondo de pensiones PORVENIR S.A. al momento del traslado al régimen de ahorro individual *"nunca"* le indicó las características de dicho régimen, pues *"lo único que vimos fue un documento para firmar y eso fue todo"*, tampoco le explicaron sobre los aportes que había realizado al ISS, ni que iba a pasar con los aportes realizados a PORVENIR al momento de fallecer. Agregó en su declaración que le explicaron que iba tener una cuenta de ahorro individual, pero no le hablaron de rendimientos. Ante la pregunta realizada por la apoderada de PORVENIR S.A. acerca de la razón por la cual no se trasladó nuevamente al RPM administrado por Colpensiones, el accionante manifestó que: *"...llevaba varios años*

*tratando de averiguar sobre consultas y circunstancias y nunca me dijeron nada...”.*

De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Insiste PORVENIR S.A. que en este caso al Sr. ROZO TIRADO confiesa haber recibido visita de los asesores de esa AFP en la que se le entregó información acerca del régimen de ahorro individual, así mismo, la AFP citó al demandante a comparecer para recibir reasesoría, sin embargo se insiste que la obligación del fondo privado era demostrar, que en aquel instante en que se produjo el traslado inicial del demandante (previo a firmar el formulario de afiliación), entregó toda la información necesaria para adoptar una decisión informada y evidentemente en este caso ello no ocurrió, lo que implica que sea procedente dar aplicación a lo establecido en el art. 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.*

Esa consecuencia, que afecta directamente el origen del acto, esto es, como si éste no hubiera existido, implica que todas las actuaciones surtidas en el interregno se tendrían así mismo como ineficaces, incluyendo las afiliaciones a otras AFP en caso de existir, así como las llamadas re asesorías a la que dice la apoderada de la AFP fue citado el demandante.

Ahora respecto a lo manifestado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que el actor recibió comunicación por parte de esa AFP de que contaba con la posibilidad de trasladarse al RPMPD antes de que le faltaren menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse establecidos en la ley, considera la Sala igualmente que, en este caso, la AFP tampoco cumplió con su obligación de suministrar una información completa, clara y suficiente relacionada con las características de los dos regímenes, que le permitiera al Sr. ROZO TIRADO tomar una decisión acorde con sus expectativas pensionales; no era suficiente el envío por parte de AFP de una comunicación al demandante, máxime si en el interrogatorio de parte insiste el actor que *"nunca se recibió esa carta"* *"nunca"*, pues se reitera, con ese escrito no se evidencian los presupuestos para que el acto jurídico de afiliación a esa AFP -que data del 28 de diciembre de 1995- cumpla con las características descritas del deber de información, de modo que esa comunicación no convalida los vicios del acto inicial de afiliación.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a devolver.**

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, tema discutido por la AFP PORVENIR S.A. en los alegatos de conclusión, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto

las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada, advirtiendo que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos referidos en la sentencia de primera instancia anteriormente mencionados, deben incluir la respectiva indexación, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según fue solicitado por COLPENSIONES en la contestación a la demanda, lo

que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

### **Condena en costas.**

Otro tema que se cuestiona en los alegatos de conclusión de PORVENIR S.A. tiene que ver con la decisión de imposición de la condena en costas en su contra, lo primero que debe advertir la Sala es que los alegatos de conclusión no son la oportunidad procesal para debatir la decidido por el Juez de Primera Instancia, pues para ello, se da la oportunidad de presentar el recurso de apelación; sin embargo, se recuerda que, el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en todas sus partes.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 ' 160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Itagüí, el día 5 de julio de 2022.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 ' 160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ede832ccabd75ad08dc1db1e5d8b30f3b12cdde070651ca9c54a71a989dbeeee**

Documento generado en 26/01/2023 01:12:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>